

La problemática ambiental desde la mirada de las ciencias sociales: injusticias ambientales y luchas por los derechos humanos.

Entrevista a Gabriela Merlinsky

Carlos Santos* y Gabriela Merlinsky**1

En un bar de la margen oriental del Río de la Plata mantuvimos una conversación con Gabriela Merlinsky sobre los conflictos ambientales en el sur y en el norte, las posibilidades de impugnación a la forma de vida dominante y el rol de las ciencias sociales en ese proceso.

Socióloga argentina con doctorado en geografía en Francia y en Ciencias Sociales en Argentina, Merlinsky ha coordinado un trabajo sistemático sobre los conflictos ambientales en la vecina orilla que la han posicionado como una referencia ineludible para hablar sobre la cuestión ambiental.

Carlos Santos (CS) ¿Qué diferencias o similitudes encuentras entre los conflictos ambientales del primer mundo y los de nuestra región?

Gabriela Merlinsky (GM): He estado siguiendo bastante lo que está pasando en Francia, donde hay una generalización de las luchas por el agua que tienen características muy parecidas a lo que hemos visto en los últimos diez o quince años en América Latina. Asambleas con una participación juvenil destacada que incluyen medidas de acción directa en disputas territoriales muy intensas. En marzo de 2023 hubo un caso en un pequeño municipio: Sainte-Soline, en el centro-oeste de Francia. Ahí la población se manifestó en contra los embalses de riego construidos por los proyectos del agronegocio. Y hay colectivos que tienen características no tan diferentes a las redes en América Latina, como colectivo de asociaciones Embalses No, Gracias, el movimiento ecologista *Soulèvements de la Terre* (Levantamientos de la Tierra) y la Confederación Paisana. Por supuesto que esto no se puede generalizar, pero si miramos de cerca estas experiencias vemos que en el norte también hay una discusión sobre el extractivismo. El Pacto Verde Europeo aspira a que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050. Aunque el objetivo es desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos, no hay estrategias ni objetivos concretos para impulsar el decrecimiento, más bien lo que hay es una búsqueda por apalancar la economía europea a través

1* Centro Universitario de la Región Este, Universidad de la República

** Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires - CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

de la transición energética que, por cierto, implica más extracción de materiales en el Sur Global. Son precisamente estos grupos como los que se manifestaron en Sainte-Soline, los que más bregan por formas muy concretas de existencia que permitan disminuir la tasa de extracción de recursos.

En Francia existe la Ley del Debate Público que hace que cada vez que se va a instalar una usina termoeléctrica, se propone la expansión del TGV [Tren de Alta Velocidad] o la instalación de una planta de residuos peligrosos, se realiza una consulta, la gente participa, hay un debate, y después se toma una decisión. No es que la participación social impide el avance de las obras, pero hay un debate público y se decide considerando diferentes puntos de vista. Lo que estamos viendo ahora en Francia es lo contrario, se están dando situaciones de conflicto a partir de hechos consumados, no hay consulta previa y hay mucha discrecionalidad en los procesos decisionales. Y también en estas experiencias hay un ecologismo popular en el que se ponen en juego alianzas de clases medias con trabajadoras y trabajadores, en algunos casos sindicatos. Se pone en el centro la defensa de la vida en una discusión más profunda acerca de cómo queremos vivir juntos, en un contexto de crisis climática, de una guerra que no parece terminar, de una Comunidad Económica Europea que cambia las agendas. Antes la tecnología nuclear era algo que había que reducir, ahora se le considera energía limpia, entonces también hay mucha desesperanza con las soluciones institucionales.

(CS) Entonces entiendes que mantiene vigencia la conceptualización de ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier para pensar la movilización ambiental no sólo en nuestros países sino también en el norte.

(GM): Bueno el propio *Joan Martínez Alier* ha reformulado esa noción y plantea hablar de ecologismo popular. También está la discusión acerca de cómo conceptualizamos lo popular, la idea de pueblo y, por cierto, dónde quedaron los estados nacionales.

(CS) Pensando también desde Europa y desde Francia en particular, Bruno Latour propuso en su *Manifiesto Ecológico Político* la idea de la necesidad de una clase ecológica, una clase social en esos términos.

(GM): Creo que ese es un punto ciego de Latour, que implica no conocer las luchas que se dan en América Latina, que se estructuran en torno a cuestiones de etnicidad, raza, pueblos indígenas, todas identidades muy asociadas a la defensa de los territorios. El argumento de él es 'no hay intereses de clase en las luchas ambientales' y ahí se apega a un análisis marxista de clases sociales muy a la europea. Nosotros ya hemos dado esa discusión acerca de la heterogeneidad estructural de las clases sociales en América Latina. Lo que se está obviando ahí es que sí hay una organización social y política en las luchas ambientales, como se da por ejemplo en la discusión sobre la minería, o la disputa por el represamiento de los ríos, la resistencia a los monocultivos o el cuestionamiento al acaparamiento de tierras. Esas disputas dan lugar a formas específicas de organización político-ecológica. Seguramente se trata de actores que no se autodefinen ecologistas, pero están discutiendo sobre la tierra, la naturaleza, la defensa del buen vivir, los

bosques, entonces sí es un ecologismo de clase, en el sentido de que hay un interés específico que es propio de aquellos que necesitan del trabajo y la naturaleza para poder reproducir sus condiciones de existencia. También hay grupos que movilizan identidades y conocimientos que están anclados a procesos de trabajo y su relación con la tierra, como son los campesinos. Por otra parte, no se puede desconocer el papel que juegan los ecofeminismos, las ecologías políticas feministas, los feminismos comunitarios, etc., donde el cuidado del ambiente y los cuidados en general también se conceptualizan como trabajo (en este caso trabajo de reproducción).

(CS) Sin que necesariamente eso tenga una traducción político partidaria.

(GM): Y sin que necesariamente sea el conflicto capital-trabajo en la forma clásica. Porque a Latour lo que le preocupa es quién va a disputar políticamente y lo que dice es bueno, disputemos nosotros los ecologistas, constituyámonos en una clase, con un interés específico. Lo que ocurre es que en América Latina nunca hubo sólo clase obrera. Y los que trabajamos en estos temas lo que vemos es que hay colectivos que defienden intereses específicos como la defensa de la tierra, la defensa del bosque, y eso sí puede traducirse como un interés de clase.

(CS) Por otro lado, en Uruguay estamos ante la eclosión de identidades partidarias que apelan al ecologismo. Y una de ellas llegó al parlamento en las últimas elecciones. Sin embargo, no tienen una agenda 'de clase' en el sentido de Latour, sino una agenda neoconservadora, punitivista, anti-agenda de derechos, donde lo natural aparece anclado a la idea de soberanía. Hay una captura partidaria y conservadora de las luchas ambientales.

(GM): En general cuando me preguntan por la situación en Argentina y yo respondo presentando un cuadro general de la conflictividad ambiental, muchos interlocutores notan inmediatamente la ausencia de los partidos políticos. Y yo digo que es paradójico. En 2006, por ejemplo, con el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, el entonces presidente Néstor Kirchner fue hasta Gualguaychú y dijo que la protección del ambiente era una cuestión de Estado, lo que habilitó a que la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo también lo fuera. Es un momento importante de politización, aparece la figura del presidente y hay un referenciamiento a un partido político.

(CS) ¿No hubo antes otro momento así?

(GM): No. Pero después eso se fue diluyendo, especialmente porque hubo un avance muy importante del extractivismo y eso dejó de formar parte de la discusión. Si mirás los debates o la discusión electoral los partidos no incluyen estos temas en la agenda. Es un proceso llamativo, hay politización, pero sin partidos políticos en el caso argentino. Si eso va a cambiar no lo sé. Quizás en Argentina eso tenga que ver con esa crisis cíclica y una idea muy consensual de la clase política de que hay que exportar para paliar esas crisis.

(CS) Cuando están en la cresta de la ola no se puede discutir el modelo porque es lo que está derramando la riqueza y cuando están en medio de las crisis no se puede discutir porque la salida está anclada a esa misma lógica. Es una suerte de círculo vicioso.

(GM): Y no surgen actores políticos que digan vamos a llevar estos temas para colocarlos en debate en el congreso. Pudo haber sido Pino Solanas en su momento.

(CS) Y este protagonismo que están teniendo los jóvenes en Europa, ¿aparece en las movilizaciones que se dan en nuestro continente?

(GM): Todos conocemos el movimiento de Greta Thunberg y el movimiento de *Friday's for future*, que son muy activos en Inglaterra, pero menos en Francia y algo en España. Lo que tienen esas movilizaciones como interesante es que escalaron muy rápido en acciones de coordinación internacional. Participan en las Conferencias de las Partes de Naciones Unidas, son muy activos en las campañas globales y eso les da mucha visibilidad. Aquí hay un reescalamiento de las campañas y eso es muy importante porque se necesita una agenda global en relación con estos temas. Pero también en Argentina ya se empiezan a ver grupos al estilo de organizaciones no gubernamentales profesionales que tienen personería jurídica, poseen una estructura, cuentan con personal especializado contratado y logran acceder a fondos y donaciones de terceros (públicos o privados). Esto los vuelve interlocutores más directos de las políticas estatales, especialmente esas que requieren mostrar la participación de la sociedad civil. Esto implica un riesgo de captura de los procesos colectivos por las agendas más globales y la falta de involucramiento con las organizaciones de base que tienen reclamos territoriales más anclados justamente a una agenda de distribución, de acceso a la tierra o de construcción de agendas de soberanía alimentaria.

(CS) ¿Y hay algo parecido a nivel interno? Esa conexión global ¿se da en vínculo con los procesos territoriales de lucha o siguen esa agenda global?

(GM): Hay características distintivas del ambientalismo que se da por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde tienen sede buena parte de esas ONGs profesionales, muchas de ellas han sido interlocutoras del Gobierno de la Ciudad en los últimos años. Eso da una visibilidad enorme, porque el gobierno de la ciudad, de una orientación de centro liberal sí tiene una agenda climática. No es una agenda ligada a la justicia ambiental, pero sí es muy efectiva en su participación en las coaliciones de ciudades por el cambio climático como ICLEI o C 40. Esta internacionalización de la agenda de CABA sumada a la presencia directa de ONGs especializadas en la ciudad produce el efecto de darle una centralidad a estos temas frente a los problemas del resto del país e incluso -lo que quizás tiene consecuencias aún más graves- dejando de lado las cuestiones metropolitanas, que es allí donde se concentran las desigualdades. Por otro lado, las organizaciones que buscan poner freno al avance de especulación financiera e inmobiliaria en la

ciudad son dejadas de lado, casi no tienen interlocución con el gobierno de la ciudad y no se ve que la agenda climática tome en cuenta aspectos de la planificación del uso del suelo o la protección del espacio público. También hay mucha fragmentación en la agenda del ecologismo popular donde todavía hay poca articulación entre los movimientos urbanos y los que tienen reclamos más localizados territorialmente en las provincias argentinas, como puede ser la resistencia a la minería, la discusión por el fracking o la defensa de los humedales.

(CS) ¿No hay una articulación de todos esos temas?

(GM): No. Ese papel lo ocupa la Unión de Asamblea de Comunidades, que es un espacio muy interesante de coordinación, de difusión, de activismo, pero no hay una voz nacional de todos estos temas.

(CS) Ni tampoco a nivel regional ¿no?

(GM): No. Recientemente estuve en Chile y me sorprendió el nivel de desconexión que tenemos con las movilizaciones que se registran allí. Y salvando la escala lo mismo sucede con Brasil.

(CS) ¿Y qué noticias tenés del mundo andino? En determinado momento con las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador parecían emerger como dos referencias fuertes de la ambientalización de los Estados, con esta idea de los derechos de la naturaleza.

(GM): Me gustaría destacar especialmente lo ocurrido en Ecuador en torno a la consulta por el Yasuní. La campaña tuvo inicio en los años 2000 bajo el impulso de Acción Ecológica, a partir de una propuesta de un programa para una “moratoria petrolera” para poner un freno a las actividades extractivas en el oriente ecuatoriano. En el año 2007 el entonces presidente Rafael Correa, la formalizó como una propuesta del estado a la comunidad internacional y propuso la tesis de una compensación monetaria para no explotar las reservas petroleras ubicadas del campo ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Luego de algunas negociaciones internacionales, la propuesta fue dada de baja por el propio presidente Correa. Sin embargo, el tema se reabrió en 2023 a partir de una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador que habilitó una Consulta Popular sobre el tema. La misma se realizó en de 2023 y ganó el Sí a la protección de la selva amazónica ecuatoriana y desmantelamiento de la actividad petrolera por más del 60% de los votos, a partir de una campaña cuya principal consigna fue: “Justicia climática ya”.

La implementación de la consulta implica el desmantelamiento paulatino de los campos petroleros y esto representa un enorme desafío pues es una cuestión clave en el debate ambiente/desarrollo porque desde que Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en 1972, se ha instalado en el imaginario colectivo el argumento del beneficio económico como resultado de la explotación petrolera y su papel para acabar con la pobreza. Sin embargo, la pobreza no ha parado de crecer en la Amazonía.

(CS) ¿Y qué lugar te parece que puede ocupar la Universidad como institución? Nuestras universidades públicas ¿podrían contribuir a dinamizar estos procesos? Pienso en tu experiencia con las comunidades de la cuenca Matanza-Riachuelo.

(GM): Sigue habiendo poco financiamiento para las ciencias sociales en torno a estos temas. Por cierto, no se trata de construir una imagen pacífica de toda una comunidad que comparte perspectivas, en realidad hay una tensión muy grande al interior del campo científico de las ciencias sociales latinoamericanas acerca de si se sale de las crisis con más extractivismo... Una de las áreas clave es el acceso a la información, no sólo por los aspectos institucionales, dado que las políticas públicas se fortalecen si las organizaciones hacen control de gestión y para eso se necesita toda una propuesta de construcción de los datos, en donde las ciencias sociales pueden aportar. Pero también hay que pensar en lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial. Cada vez será más relevante chequear la calidad de las fuentes de datos, la disponibilidad de estos en acceso abierto y los temas de comunicación. Aquí hay muchas disciplinas que pueden hacer una contribución.

(CS) Las limitaciones de la institución Universidad ya son conocidas (falta de presupuesto, precarización, falta de apertura al diálogo) pero a veces es la posición de las propias personas que conforman la institución lo que inhabilita la construcción de espacios de diálogo de saberes.

(GM): Hay una visión dominante en las ciencias sociales latinoamericanas muy asociadas al proyecto desarrollista, incluso cuando precisamente se discute sobre el modo de encontrar la vía propia, el camino regional. Los megaproyectos liderados o apoyados por el Estado, generalmente se presentan como un imperativo de desarrollo. Ya sea que se trate de la extracción de minerales, agronegocio, energía, etc., el planteo es que eso requiere cambios de gran escala para generar puestos de trabajo, aumentar el PBI, crear infraestructuras e impulsar procesos de modernización. El tema es que esa promesa de desarrollo estructura la relación entre Estados y ciudadanos y aquí hay una mirada muy vertical del Estado: el ambiente son los recursos y, en todo caso, el problema no es la extracción si no quién tiene la propiedad de esos recursos. Esto no deja espacio para discutir el modelo extractivo, una cuestión clave para las comunidades, los territorios y los escenarios de largo plazo en términos de la preservación de los comunes y las condiciones para la vida futura. Y en las universidades pesa mucho la herencia de la modernidad, con esa idea de progreso, un imaginario poderoso, una forma de racionalidad que, de múltiples maneras, ha permeado los debates y los proyectos desarrollistas en América Latina. Y cuando hay una convergencia entre el paradigma del excepcionalismo humano con una visión evolucionista de la bondad intrínseca del desarrollo de las fuerzas productivas se produce un punto ciego que impide el debate sobre el papel de la ciencia y la tecnología.

(CS) Y en esa misma lógica se miran todos los procesos de participación de una manera muy instrumental, sin la posibilidad de discutir qué se entiende por desarrollo para cada territorio o comunidad.

(GM): En octubre de 2022 estuve en Colombia, participando del Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales y en la apertura estuvo Irene Vélez, la Ministra de Minería del gobierno de Gustavo Petro. Allí ella utilizó el concepto de pre-distribución, la idea de que antes de que se instale un mega proyecto el Estado debería potenciar las condiciones para sostener la producción campesina, la agroecología. Después están todas las propuestas de los pactos, como el Pacto Ecosocial del Sur, que plantean discusiones interesantes sobre cómo hacer una transición indispensable en el marco de la crisis civilizatoria actual, pero manejando nuestros propios términos y no la idea de “ajuste ambiental” que viene impuesta desde fuera. Estas propuestas discuten mucho con la idea del Pacto Verde en Europa o el New Green Deal en Estados Unidos y una se pregunta por qué esas discusiones no se amplían a espacios de debate más amplios. Desde el sur podríamos contribuir a un asunto clave que es la deuda ecológica, por ejemplo.

(CS) Las discusiones históricas del ambientalismo en el continente, siguen plenamente vigentes. Quizás lo realmente novedoso de este momento sea la idea misma de transición, aunque hay que ver con qué sentido se la carga.

(GM): Sí, porque como ya sucedió con el desarrollo sustentable ya empieza a ser también un término retórico. Aquí tenemos que empezar a hablar de transformación, más que de transición. Y, de nuevo, acá las ciencias sociales tienen mucho para aportar porque eso implica pensar una teoría del cambio social.